



PROTECCIÓN DE LA MINORÍA SOCIETARIA: LÍMITES Y GARANTÍAS

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA Y PRIVACIÓN DEL DERECHO DE VOTO: DOS LÍMITES RELEVANTES EN LA PROTECCIÓN DE LA MINORÍA SOCIETARIA (SAP MADRID 140/2026, DE 15 DE ABRIL)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) número 140/2026, de 15 de abril, aborda dos cuestiones relevantes en el ámbito del derecho societario, como son los límites materiales del derecho de complemento de convocatoria y las consecuencias jurídicas derivadas de la privación indebida del derecho de voto del accionista disidente.

El litigio trae causa de una demanda mediante la cual se solicitaba la declaración de nulidad de la junta general de una sociedad anónima y la reposición en su cargo de un consejero que ostentaba asimismo la condición de consejero delegado. Subsidiariamente, se interesaba la nulidad del acuerdo por el que se promovía el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra dicho administrador.

En primera instancia, la demanda fue desestimada. Respecto de la impugnación de la junta, el juzgado entendió que la negativa del órgano de administración a publicar el complemento de convocatoria solicitado por la demandante se ajustaba a lo previsto en el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), al considerar que el órgano de administración puede verificar no solo el cumplimiento de los requisitos formales de la solicitud, sino también que esta no resulte contraria al interés social ni constituya un ejercicio abusivo del derecho. Sobre esa base, concluyó que algunas de las propuestas formuladas versaban sobre materias ajenas a la competencia de la junta general, mientras que otras resultaban potencialmente perjudiciales para la sociedad.

Asimismo, la sentencia de instancia rechazó la impugnación del acuerdo del ejercicio de la acción social de responsabilidad. Aunque reconoció la existencia de controversia en relación con la privación del derecho de voto de la demandante, consideró que dicha circunstancia carecía de relevancia invalidante por aplicación del denominado test de resistencia previsto en el artículo 204.3.d) LSC, al no haber resultado determinante dicho voto para la obtención de la mayoría necesaria para la aprobación de los acuerdos.

Frente a dicha resolución se interpuso recurso de apelación. En lo que respecta al complemento de convocatoria, la recurrente sostuvo que la negativa de su publicación vulneraba el artículo 172 LSC y suponía una restricción injustificada de los derechos del socio.

La Audiencia Provincial confirma, sin embargo, el criterio de la sentencia de instancia en este extremo. Tras recordar que el derecho de complemento de convocatoria constituye un derecho esencial de la minoría, señala que el órgano de administración no actúa como un mero receptor automático de las solicitudes formuladas por los accionistas, sino que puede efectuar un control tanto formal como material sobre los puntos cuya inclusión se pretende.

Aplicando este criterio, la Sala considera correcta la exclusión de los puntos relativos al “Examen, valoración y votación, en su caso, de la venta de la sociedad para solucionar discrepancias existentes entre los socios” y a la “Presentación y votación, en su caso, de alternativas para solucionar las discrepancias existentes entre los socios”, por tratarse de cuestiones que exceden del ámbito competencial de la junta general. La junta no ostenta competencias para decidir sobre la venta de las acciones de los socios ni para resolver conflictos existentes entre ellos.

Del mismo modo, la Audiencia avala la negativa a incluir el punto relativo a la “Aprobación, en su caso, de las posibles actuaciones preventivas a realizar en materia de insolvencia en cumplimiento de la normativa”. Según razona la Sala, la mera inclusión de una referencia expresa a una eventual situación de insolvencia podía generar alarma en el mercado y comprometer gravemente la reputación de la sociedad, circunstancia especialmente relevante teniendo en cuenta que esta desarrollaba su actividad como agencia de valores. En consecuencia, concluye que la salvaguarda de los intereses sociales puede operar excepcionalmente como límite al derecho de complemento de convocatoria reconocido a la minoría.

La Audiencia añade que, aunque con carácter general las solicitudes de complemento pueden ser objeto de reformulación o adaptación para acomodarlas a las exigencias legales, en el caso concreto no existía posibilidad de reformular las propuestas presentadas. Las dos primeras por referirse a materias ajenas a la competencia de la junta general y la tercera porque cualquier reformulación seguiría proyectando dudas sobre la solvencia de la sociedad, con el consiguiente riesgo para sus intereses.

Distinta es la conclusión alcanzada respecto del acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad y del correlativo cese del consejero delegado. En este punto, la Audiencia estima el recurso y concluye que la privación del derecho de voto de la accionista recurrente no se ajustó a Derecho. Tras analizar el artículo 190 LSC, entiende que la situación examinada no encajaba en ninguno de los supuestos legalmente tasados, que se prevén en el apartado 1 de este artículo, que permiten excluir el derecho de voto del socio por conflicto de interés.

La principal aportación de la resolución radica, precisamente, en el tratamiento de las consecuencias derivadas de dicha vulneración. Frente al criterio mantenido por el juzgado de instancia, la Audiencia declara que el test de resistencia previsto en el artículo 204.3 d) LSC no resulta aplicable cuando se ha privado indebidamente a un socio de su derecho de voto. A juicio de la Sala, dicho mecanismo está concebido para los supuestos de cómputo erróneo de votos o de participación de quienes carecían de legitimación para votar, pero no para aquellos casos en los que se ha impedido a un socio participar en la formación de la voluntad social.

La sentencia subraya que el derecho de voto constituye un derecho esencial del socio que no puede reducirse a su capacidad de alterar el resultado de una votación. Lo relevante no es únicamente la influencia cuantitativa del voto en el acuerdo finalmente adoptado, sino el derecho de intervenir en el proceso deliberativo y decisorio de la junta general. Además, añade, si se resolviese en contra, ello convertiría en absolutamente vulnerable el derecho esencial de voto del socio, que se convertiría en inexistente cuando su postura en una junta resultase minoritaria.

Por todo ello, la Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso y declara la nulidad del acuerdo, así como la ineficacia del cese del consejero producido, acordando su reposición en ambos cargos y la correspondiente rectificación registral.

En definitiva, la resolución resulta especialmente relevante por determinar los límites materiales del derecho de complemento de convocatoria de la minoría y, sobre todo, por afirmar que la privación indebida del derecho de voto constituye una vulneración que no puede quedar convalidada mediante la aplicación del test de resistencia cuando se vulnera el derecho esencial de participación del socio en la formación de la voluntad social.

Artículo realizado por:



Oriol Almirall
Socio · Abogado
orioalmirall@arcoabogados.es
T +34 934 871 020
Barcelona



Berta Canals
Abogada
bertacanals@arcoabogados.es
T +34 934 871 020
Barcelona



PROTECCIÓ DE LA MINORIA SOCIETÀRIA: LÍMITS I GARANTIES

COMPLEMENT DE CONVOCATÒRIA I PRIVACIÓ DEL DRET DE VOT: DOS LÍMITS RELLEVANTS EN LA PROTECCIÓ DE LA MINORIA SOCIETÀRIA (SAP MADRID 140/2026, DE 15 D'ABRIL)

La Sentència de l'Audiència Provincial de Madrid (Secció 28a) número 140/2026, de 15 d'abril, aborda dues qüestions rellevants en l'àmbit del dret societari: els límits materials del dret de complement de convocatòria i les conseqüències jurídiques derivades de la privació indeguda del dret de vot de l'accionista dissident.

El litigi té l'origen en una demanda mitjançant la qual se sol·licitava la declaració de nul·litat de la junta general d'una societat anònima i la reposició en el seu càrrec d'un conseller que també ostentava la condició de conseller delegat. Subsidiàriament, es demanava la nul·litat de l'acord pel qual es promovia l'exercici de l'acció social de responsabilitat contra aquest administrador.

En primera instància, la demanda va ser desestimada. Pel que fa a la impugnació de la junta, el jutjat va entendre que la negativa de l'òrgan d'administració a publicar el complement de convocatòria sol·licitat per la demandant s'ajustava al que preveu l'article 172 del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital («LSC»), en considerar que l'òrgan d'administració pot verificar no només el compliment dels requisits formals de la sol·licitud, sinó també que aquesta no sigui contrària a l'interès social ni constitueixi un exercici abusiu del dret.

Sobre aquesta base, va concloure que algunes de les propostes formulades versaven sobre matèries alienes a la competència de la junta general, mentre que d'altres podien resultar potencialment perjudicials per a la societat.

Així mateix, la sentència d'instància va rebutjar la impugnació de l'acord d'exercici de l'acció social de responsabilitat. Tot i reconèixer l'existència de controvèrsia en relació amb la privació del dret de vot de la demandant, va considerar que aquesta circumstància no tenia rellevància invalidant en aplicació de l'anomenat test de resistència previst a l'article 204.3.d) de la LSC, ja que aquest vot no havia estat determinant per assolir la majoria necessària per a l'aprovació dels acords.

Contra aquesta resolució es va interposar recurs d'apel·lació. Pel que fa al complement de convocatòria, la recurrent va sostenir que la negativa a la seva publicació vulnerava l'article 172 de la LSC i suposava una restricció injustificada dels drets del soci.

L'Audiència Provincial confirma, tanmateix, el criteri de la sentència d'instància en aquest extrem. Després de recordar que el dret de complement de convocatòria constitueix un dret essencial de la minoria, assenyala que l'òrgan d'administració no actua com un mer receptor automàtic de les sol·licituds formulades pels accionistes, sinó que pot efectuar un control tant formal com material dels punts la inclusió dels quals es pretén.

Aplicant aquest criteri, la Sala considera correcta l'exclusió dels punts relatius a l'«Examen, valoració i votació, si escau, de la venda de la societat per solucionar les discrepàncies existents entre els socis» i a la «Presentació i votació, si escau, d'alternatives per solucionar les discrepàncies existents entre els socis», ja que es tracta de qüestions que excedeixen l'àmbit competencial de la junta general. La junta no ostenta competències per decidir sobre la venda de les accions dels socis ni per resoldre els conflictes existents entre ells.

De la mateixa manera, l'Audiència avala la negativa a incloure el punt relatiu a l'«Aprovació, si escau, de les possibles actuacions preventives a realitzar en matèria d'insolvència en compliment de la normativa». Segons raona la Sala, la mera inclusió d'una referència expressa a una eventual situació d'insolvència podia generar alarma al mercat i comprometre greument la reputació de la societat, circumstància especialment rellevant atès que aquesta desenvolupava la seva activitat com a agència de valors.

En conseqüència, conclou que la salvaguarda dels interessos socials pot operar excepcionalment com a límit al dret de complement de convocatòria reconegut a la minoria.

L'Audiència afegeix que, encara que amb caràcter general les sol·licituds de complement poden ser objecte de reformulació o adaptació per acomodar-les a les exigències legals, en el cas concret no existia cap possibilitat de reformular les propostes presentades. Les dues primeres, perquè es referien a matèries alienes a la competència de la junta general, i la tercera, perquè qualsevol reformulació continuaria projectant dubtes sobre la solvència de la societat, amb el consegüent risc per als seus interessos.

Diferent és la conclusió assolida pel que fa a l'acord d'exercici de l'acció social de responsabilitat i al correlatiu cessament del conseller delegat. En aquest punt, l'Audiència estima el recurs i conclou que la privació del dret de vot de l'accionista recurrent no es va ajustar a dret. Després d'analitzar l'article 190 de la LSC, entén que la situació examinada no encaixava en cap dels supòsits legalment taxats previstos a l'apartat 1 d'aquest article, que permeten excloure el dret de vot del soci per conflicte d'interès.

La principal aportació de la resolució rau, precisament, en el tractament de les conseqüències derivades d'aquesta vulneració. Davant del criteri mantingut pel jutjat d'instància, l'Audiència declara que el test de resistència previst a l'article 204.3.d) de la LSC no resulta aplicable quan s'ha privat indegudament un soci del seu dret de vot. A parer de la Sala, aquest mecanisme està concebut per als supòsits de còmput erroni de vots o de participació de persones que no tenien legitimació per votar, però no per als casos en què s'ha impedit a un soci participar en la formació de la voluntat social.

La sentència subratlla que el dret de vot constitueix un dret essencial del soci que no es pot reduir a la seva capacitat d'alterar el resultat d'una votació. El que és rellevant no és únicament la influència quantitativa del vot en l'acord finalment adoptat, sinó també el dret d'intervenir en el procés deliberatiu i decisor de la junta general. A més, afegeix que, si es resolgués en sentit contrari, el dret essencial de vot del soci esdevindria absolutament vulnerable, ja que passaria a ser inexistent quan la seva posició en una junta resultés minoritària.

Per tot això, l'Audiència Provincial de Madrid estima parcialment el recurs i declara la nul·litat de l'acord, així com la ineficàcia del cessament del conseller produït, acordant-ne la reposició en ambdós càrrecs i la corresponent rectificació registral.

En definitiva, la resolució resulta especialment rellevant perquè determina els límits materials del dret de complement de convocatòria de la minoria i, sobretot, perquè afirma que la privació indeguda del dret de vot constitueix una vulneració que no pot quedar convalidada mitjançant l'aplicació del test de resistència quan es vulnera el dret essencial de participació del soci en la formació de la voluntat social.

Article elaborat per:



Oriol Almirall
Soci · Advocat
orioalmirall@arcoabogados.es
T +34 934 871 020
Barcelona



Berta Canals
Advocada
bertacanals@arcoabogados.es
T +34 934 871 020
Barcelona